

Santiago, siete de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS:

En estos autos rol N° 33.345-2019, se ha tramitado un procedimiento de reclamación tributaria, en que la parte reclamada del Servicio de Impuestos Internos (en adelante S.I.I.), dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El citado fallo confirmó la sentencia de primer grado, de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, pronunciada por el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de Santiago, acogiendo la reclamación deducida por la contribuyente Inversiones Silvestre Corporation (Chile) Limitada, dejando sin efecto la Liquidación N° 235, de fecha 28 de mayo 2015, por concepto de Impuesto a la Renta de Primera Categoría, correspondiente al año tributario 2012, por un monto de \$4.121.550.592, emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos.

Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se dispuso traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en su arbitrio de nulidad sustancial el Servicio de Impuestos Internos, en primer término denuncia como infringidos el artículo 132 del Código Tributario, en relación a los artículos 2, 20 y 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (en adelante LIR) y 89 del Código de Procedimiento Civil.

Al efecto, refiere que el fallo recurrido alcanzó sus conclusiones desestimando la notoriedad y conocimiento público de los hechos y antecedentes conocidos como “Caso Cascada”, así como la existencia de una serie de



antecedentes probatorios aportados a la segunda instancia, y lo que resulta aún más gravoso al servicio recurrido, el contenido de las Resoluciones Ex. N° 223, de fecha 02 de septiembre de 2014 y Ex. N° 271, de fecha 30 de octubre de 2014, por estimar respecto de estas últimas que, al no haber sido acompañadas en la forma dispuesta por la ley, no habrían sido objetadas u observadas por la parte contraria, lo que le impediría a dicha Corte de hacerse cargo o analizar su relevancia probatoria.

Expone que, en relación a lo que se denomina “*caso cascadas*”, resulta ser de conocimiento público, que en el año 2014, la Superintendencia de Valores y Seguros (En lo sucesivo SVS), mediante las resoluciones citadas, estableció la existencia de una coordinación ilícita realizada a través de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo y con el concurso de los mismos participantes, estableciéndose de esta forma la existencia de un esquema coordinado de operaciones que se desarrolló principalmente con los títulos Calichera-A, Oro Blanco, Norte Grande, SQM-A y SQM-B, y en él participaron de manera reiterada ciertas personas, a través de distintas sociedades, una de ellas sociedad Inversiones Silvestre Corporation, con diversa frecuencia y oportunidad, en lo que la SVS ha denominado ciclos de un mismo esquema. Ello habría beneficiado directa y económicamente al controlador y principal accionista del Holding, Julio Ponce Lerou, y a personas cercanas a él, que participaron de diversas formas en dicho esquema, a través de sociedades vinculadas e instrumentales, todo en desmedro económico y contra el interés social de las sociedades cascadas. En este contexto –explica la recurrente–, la autoridad administrativa resolvió imponer una multa de aproximadamente de US\$ 21 millones, en contra de Roberto Guzmán Lyon, por la participación, a través de sus sociedades de inversión –entre ellas Inversiones



Silvestre- en el caso cascada, específicamente por *“efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento”* y *“efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios”*.

Explica que, en segunda instancia, los documentos se tuvieron por acompañados por el tribunal y fueron oportunamente observados por la contraria y que, en materia tributaria el sistema de valoración imperante es el de la sana crítica, contenida en el inciso 15°, del artículo 132, del Código Tributario. No está permitido a los jueces de instancia que en el análisis de los medios de prueba aportados puedan prescindir de elementos de convicción que están llamados a valorar, de acuerdo a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, pues de hacerlo así, desde luego infringen, precisamente, las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO: Que, en un segundo capítulo de casación en el fondo, la parte recurrente denuncia como vulnerado los artículos 107 -ex 18 ter- de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con los artículos 21 del Código Tributario, 19 y 23 del Código Civil.

Arguye que de haberse interpretado el régimen consagrado en el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, recurriendo a su intención o espíritu y la historia de su establecimiento constituida por la discusión de la Leyes N° 19.768 y N° 20.448, debió determinarse que el régimen de exención contenido en dicha norma favorece a las operaciones en bolsa solo en cuanto logran una mayor participación, profundidad y liquidez en el mercado accionario local, lo que no acontece en el caso de autos, en cuanto las ya citadas Resoluciones N° 223, del 02 de septiembre de 2014 y N° 271, del 30 de octubre de 2014, ambas de la



Superintendencia de Valores y Seguros, dieron cuenta que la contribuyente, a través de su controlador, en el año comercial 2011, realizó una serie de operaciones de compra y venta de acciones, cuyos mayores valores amparó en el régimen de exención consagrado en la Ley de la Renta, las que según determinó la Superintendencia, resultaron ser contrarias a los fines y bienes jurídicos protegidos por el Título VIII de la Ley de Mercado de Valores.

Expone que además se infringe el artículo 21 del Código Tributario, pues sosteniéndose por los falladores que formalmente los antecedentes de la reclamante darían cuenta del cumplimiento de los requisitos objetivos de la norma, y que de ellos no habría indicios de haberse realizado las operaciones en bolsa, con fraude al mercado, no podía concluirse que la carga de acreditar la verdad de sus declaraciones se encontraba satisfecha.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso y se anule la sentencia impugnada, dictándose una de reemplazo por la que se rechace el reclamo interpuesto, dejando a firme la liquidación reclamada, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que para una acertada decisión del presente recurso, es necesario tener presente que la problemática a resolver por esta Corte dice relación, en primer término, con la supuesta valoración inadecuada de la prueba documental rendida en autos por el órgano fiscalizador de los tributos y, en un acápite, con la determinación de si resultaba aplicable o no a la sociedad reclamante la exención tributaria –ingreso no renta- contenida en el artículo 107 -ex 18 ter- de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de las ganancias generadas en la venta, por parte de Inversiones Silvestre, de acciones de SQM-B y Calichera-A.



CUARTO: Que para un mejor entendimiento de la causal de nulidad sustancial en estudio, resulta preciso señalar cuales son los antecedentes de la presente causa:

1.- Por medio de la Liquidación N° 235, de fecha de 28 de agosto de 2015, el S.I.I. determinó una mayor base imponible de Impuesto de Primera Categoría del ejercicio de la sociedad contribuyente, incorporando una supuesta Utilidad en Venta de acciones de SQM-B y CAUCHERA-A por la suma de \$20.343.290.190.- liquidando consecuentemente una diferencia de impuesto de primera categoría ascendente a \$4.068.658.038.- y modificando el FUT y FUNT para el año tributario 2012.

2.- Que el contribuyente dedujo reclamación *—con fecha 18 de diciembre de 2015—* respecto de dicha Liquidación, la que fue acogida por el Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de Santiago, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago por fallo de fecha 26 de agosto de 2019.

QUINTO: Que es preciso tener presente, para resolver adecuadamente el recurso interpuesto, que en el considerando cuarto de la sentencia de primer grado *—y que se tuvo por reproducido en el fallo del tribunal ad-quem—*, se dieron por establecidos, entre otros, los siguientes hechos, expresándose textualmente:

“Duodécimo: Que, entrando a analizar el fondo, cabe recordar que en el presente litigio no se discute si Inversiones Silvestre vendió o no acciones de SQM-B y Calichera-A, ni la forma en que se determinó el mayor valor que estas generaron, sino que lo discutido es el tratamiento tributario de las ganancias generadas por dichas transacciones



Decimonoveno: (...) el SII no aportó prueba ni antecedente alguno para acreditar la alegada “instrumentalización” de la Bolsa de Valores, no bastando la mera alegación de que se trata de hechos públicos y notorios.

Vigésimo: Que, la prueba aportada por el contribuyente, se encamina a justificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 de la LIR y no da indicios de la instrumentalización de la Bolsa. En efecto, el contribuyente acreditó que las ventas de acciones de las sociedades anónimas abiertas en cuestión se realizaron en una bolsa de valores y que éstas tenían presencia bursátil, tal como se extrae de las facturas de compra y de los certificados de presencia bursátil acompañados a fs. 204, 373-374, 393-399 respectivamente

Vigésimo primero: Que, a mayor abundamiento, de la respuesta a oficio de la Superintendencia de Valores y Seguros, que consta a fs. 431, se extrae que la sociedad Inversiones Silvestre Corporation (Chile) Limitada, no fue sancionada por la Resolución Exenta N° 233, pronunciamiento que fuera citado por la reclamante como respaldo de la coordinación ilícita que habría afectado a la Bolsa y que tendría, en opinión de la misma, el carácter de hecho público y notorio, según afirma a fs. 356 vuelta”.

SEXTO: Que apelada la referida sentencia por el S.I.L., los sentenciadores de segundo grado la confirmaron, argumentando en su motivo quinto y en lo pertinente al arbitrio en análisis, que: “el vocablo empleado por el Servicio de Impuestos Internos es instrumentalización de la Bolsa de Comercio como un medio indirecto para conseguir algo. Concepto que obligatoriamente debe ser acreditado en este proceso y así se refleja en el auto de prueba, sin que la recurrida haya rendido probanza alguna;

Debe dejarse especial constancia que las copias de las Resoluciones agregadas a los autos en esta instancia no fueron acompañadas en la forma



dispuesta por la ley sin que la reclamante las haya observado u objetado, impidiendo por este motivo hacerse cargo o analizar su relevancia probatoria”.

SÉPTIMO: Que las antedichas circunstancias constituyen hechos de la causa, por lo que *–como lo ha sostenido con anterioridad esta Corte, entre otros en los pronunciamientos Rol N° 12.165-2017, de fecha 29 de abril de 2019, y Rol N° 4.067-2018, de 24 de marzo de 2020–* para desvirtuarlos e instalar la premisa fáctica favorable a las pretensiones de la recurrente, es necesario que el fallo recurrido en sus fundamentaciones hubiese incurrido en violación de las leyes reguladoras de la prueba, lo que se produce cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley les asigna uno determinado de carácter obligatorio, o alteran el orden de precedencia que la ley les diere.

Cabe señalar que es el propio Código Tributario el que se encarga de establecer un sistema de valoración conforme a las reglas de la sana crítica, en su artículo 132, incisos 14° y 15°. Sin embargo, los reproches que efectúa la recurrente, buscan alterar el sustrato fáctico alcanzado por los sentenciadores del fondo, sin desarrollar mayormente la infracción de los elementos que integran la sana crítica como limitación a la ponderación libre que la ley le asigna, en esta clase de procedimientos, a los sentenciadores.

En efecto, sus argumentaciones sólo se sustentan en la supuesta omisión en que habrían incurrido los juzgadores de la instancia al no valorar la prueba documental rendida en segunda instancia, en particular la copia simple de las Resolución Exentas N° 223, de fecha 02 de septiembre de 2014 y N° 271, de fecha 30 de octubre de 2014, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, instrumentos que conforme se desprende del mérito de los antecedentes



no se tuvieron por acompañados en la forma prevista por la ley y que, por ende, no estuvieron en condiciones de ser objetados por la contraria, escapando dicha alegación del control de un recurso de derecho estricto como el intentado.

OCTAVO: Que conforme lo antes expuesto y razonado, no habiéndose acreditado por la recurrente la existencia de vulneración alguna de la leyes reguladoras de la prueba, las conclusiones a las que arribaron los sentenciadores del grado deben tenerse como hechos inamovibles por esta Corte.

NOVENO: Que en base de los hechos precedentemente señalados, y en cuanto al fondo del asunto controvertido, es menester indicar, en primer término, que el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, dispone que: *“El mayor valor obtenido en la enajenación o rescate, según corresponda, de los valores a que se refiere este artículo, se regirá para los efectos de esta ley por las siguientes reglas:*

1) Acciones de sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile con presencia bursátil.

No obstante lo dispuesto en los artículos 17, N°8, y 106, no constituirá renta el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, que cumplan con los siguientes requisitos:

a) La enajenación deberá ser efectuada en: i) una bolsa de valores del país autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros, o ii) en un proceso de oferta pública de adquisición de acciones regida por el Título XXV de la ley N° 18.045 o iii) en el aporte de valores acogido a lo dispuesto en el artículo 109;

b) Las acciones deberán haber sido adquiridas en: i) una bolsa de valores del país autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros, o ii) en un proceso de oferta pública de adquisición de acciones regida por el Título XXV de



la ley N° 18.045, o iii) en una colocación de acciones de primera emisión, con motivo de la constitución de la sociedad o de un aumento de capital posterior, o iv) con ocasión del canje de valores de oferta pública convertible en acciones, o v) en un rescate de valores acogido a lo dispuesto en el artículo 109 (...)”.

Es decir, para que el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas con presencia bursátil, no constituya renta, dicha enajenación debe ser efectuada en una bolsa de valores del país autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros o en un proceso de oferta pública de adquisición de acciones o, en el aporte de valores acogido a lo dispuesto en el artículo 109 de la citada ley.

Conforme a lo anteriormente expuesto, no habiéndose probado por el S.I.I. la supuesta instrumentalización de la Bolsa de Comercio –*fundamento por el cual dicha repartición pública desestimó considerar como ingreso no constitutivo de renta, el mayor valor obtenido por Inversiones Silvestre Corporation (Chile) Limitada en la enajenación de acciones de SQM-B y CAUCHERA-A, por la suma de \$20.343.290.190-*, como acertadamente lo resolvieron los juzgadores de la instancia, acreditándose por la contribuyente que las ventas de acciones de las sociedades anónimas abiertas en cuestión se realizaron en una bolsa de valores y que éstas tenían presencia bursátil, necesariamente resultaba aplicable a su respecto la exención tributaria contenida en el artículo 107 de la LIR, lo que necesariamente llevaba al acogimiento del reclamo interpuesto.

DÉCIMO: Que, así entonces, habiéndose efectuado por los jueces del fondo una correcta aplicación de la normativa atinente al caso en estudio, y no configurándose, en consecuencia, los errores de derecho pretendidos por la impugnante, su arbitrio será desestimado.



Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **SE RECHAZA** el recurso de casación en el fondo deducido por el Servicio de Impuestos Internos, en contra la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sr. Brito y Llanos, quienes estuvieron por hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos, en virtud de las siguientes consideraciones:

1º) Que tal como ha quedado expuesto en la presente sentencia, el recurso arguye, como primer capítulo, en que la sentencia impugnada –que confirma la de primer grado- habría incurrido en un error de derecho consistente en que se infringió el Art. 132 del Código Tributario, en relación a los artículos 2, 20 y 107, todos de la Ley sobre Impuesto a la Renta (en adelante LIR) y 89 del Código de Procedimiento Civil, basado en que al fijarse los hechos que se dieron por probados se incurrió en una vulneración a las reglas de la sana crítica consagrada en la primera de las disposiciones citadas. Funda tal aserto en que se desestimó la notoriedad y conocimiento público de los hechos y antecedentes conocidos como “Caso Cascadas”, así como la existencia de antecedentes probatorios aportados a la segunda instancia, especialmente, el contenido de las Resoluciones Ex. N° 223, de fecha 2 de septiembre de 2014 y Ex. N° 271, de fecha 30 de octubre de 2014, por estimarse por los sentenciadores del grado que, al no haber sido acompañadas en la forma dispuesta por la ley, ello impidió su análisis probatorio. Tales hechos públicos y notorios, así como las resoluciones citadas de la Superintendencia de Valores y Seguros (en adelante, SVS), permitirían concluir la existencia de una coordinación ilícita realizada a través de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, que se desarrolló principalmente con los títulos Calichera-A, Oro Blanco, Norte Grande, SQM-A y

SQM-B, y en él participaron de manera reiterada ciertas personas, a través de distintas sociedades, una de ellas sociedad “Inversiones Silvestre Corporation”, beneficiando al controlador y principal accionista del Holding, Julio Ponce Lerou, y a personas cercanas a él, que participaron de diversas formas en dicho esquema, a través de sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales, todo en desmedro económico y contra el interés social de las “sociedades cascadas”; por lo que la autoridad administrativa impuso una multa de aproximadamente de US\$ 21 millones, en contra de Roberto Guzmán Lyon, por la participación, a través de sus sociedades de inversión –entre ellas “Inversiones Silvestre”- en el “caso cascadas”, específicamente por “efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento” y “efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios”.

Indica que los referidos documentos fueron aportados por su parte en segunda instancia, los que se tuvieron por acompañados por el tribunal y fueron oportunamente observados por la contraria. Agrega que en el sistema de valoración de la sana crítica, contenido en el inciso 15° del Art.132 del Código Tributario no permite a los jueces de instancia prescindir del análisis de elementos de convicción aportados al juicio de acuerdo a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, que deben valorarlos conforme a dicho sistema probatorio.

En cuanto a la influencia del error de derecho denunciado, expresa que la sentencia atacada, al no dar por acreditado que efectivamente se instrumentalizó la bolsa de valores, contraviniendo el artículo 132 del Código Tributario, en relación con el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, dicho error incidió en



la errónea calificación de los hechos, al dar por acreditado el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 de la LIR, en circunstancias de que ello no acontece en la especie, esto es, que las utilidades obtenidas por la reclamante en la venta de acciones no podían acogerse al beneficio del ingreso no renta, y en consecuencia debió haberse revocado el fallo de primera instancia, ya que al haberse efectuado estas operaciones en bolsa y que la sentencia de primer grado estimara que formalmente la reclamante se ajustó a los requisitos establecidos en el artículo 107 de la citada ley, no resulta ser motivo para desestimar la liquidación del Servicio, por haberse utilizado o instrumentalizado el mercado de valores según determinación efectuada por el organismo fiscalizador de dicho mercado, y que aparece de la prueba aportada por su parte en segunda instancia y de los hechos públicos del caso;

2º) Que es útil consignar que son hechos del proceso, no controvertidos, los siguientes:

- a) Que la reclamante “INVERSIONES SILVESTRE CORPORATION (CHILE) LIMITADA” efectuó en el año 2011 operaciones de venta acciones SQM-B y Calichera-A, declarando el mayor valor obtenido en la venta acogido al artículo 18 Ter, actual 107 de la LIR, otorgándole el tratamiento de ingreso no renta;
- b) Que el Servicio de Impuestos Internos (en lo sucesivo, SII) en la Liquidación reclamada N° 235, de fecha 28 de mayo 2015, correspondiente al año tributario 2012, agregó el monto de \$20.343.290.190 a la Renta Líquida Imponible del Año Tributario 2012 bajo el concepto de “Utilidad Venta de acciones SQM-B, CALICHERA-A”, todo ello por concepto de Impuesto a la Renta de Primera Categoría;



- c) Que dicha liquidación fue reclamada por el contribuyente al Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de Santiago, que con fecha 27 de junio de 2017, resolvió acoger el reclamo, sentencias que fue confirmada en segunda instancia por la que ahora es objeto del recurso;
- d) Que en la segunda instancia, el apelante SII acompañó, entre otros documentos, copias simples de la Resolución Ex. N° 223, de fecha 2 de septiembre de 2014 y de la Resolución Ex. N° 271, de fecha 30 de octubre de 2014, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, en cuya parte resolutive se indica que se aplica “Al señor Roberto Guzmán Lyon la sanción de multa, a beneficio fiscal, ascendente a 550.000 UF, pagaderas en su equivalente en pesos a la fecha efectiva de su pago, por infracción a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 53 y en el inciso primero del artículo 52, ambos de la Ley N° 18.045;
- e) Que dicha resolución fue reclamada por el sancionado Guzmán Lyon en los autos rol C-21305-2014 del 16° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, causa en que por sentencia de once de diciembre de dos mil diecisiete se resuelve: “I.- Que se acoge parcialmente la reclamación de fs. 1 y siguientes, solo en aquella parte en que se rebaja y determina el monto de la multa impuesta por la SVS, sanción que se fija en 75.000 unidades de fomento, pagaderas en su equivalente en pesos a la fecha efectiva de su pago, por las infracciones a lo dispuesto en el artículo 52 inciso primero y en el artículo 53 inciso segundo, ambos de la Ley N°18.045. II.- Que se rechaza la reclamación en todo los demás.”;



f) Que la sentencia anterior fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha trece de mayo de dos mil veinte (rol N° 957-2018), y fue rechazado el recurso de casación interpuesto ante este tribunal, con fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno (Rol Corte Suprema N° 79.324-2020), encontrándose aquel fallo firme o ejecutoriado;

3°) Que el primer capítulo de casación en el fondo esgrimido por el recurrente consiste –como ha quedado más arriba dicho- en que la sentencia impugnada incurre en errores de derecho, con influencia substancial en su parte decisoria, al infringir las reglas de valoración de la prueba conforme a la sana crítica, tanto porque omite dar por establecidos hechos públicos y notorios, cuanto porque no valoró determinados antecedentes aportados al juicio, todos los cuales permiten establecer que Roberto Guzmán Lyon incurrió en ilícitos en el mercado bursátil a través de la sociedad “Inversiones Silvestre” (de la que es controlador y propietario), que fueron sancionados por la autoridad reguladora de dicho mercado, y que por tanto no cumplía los requisitos para considerar como un ingreso no renta acogido al artículo 107 de la LIR, por no cumplir dichas transacciones con los requisitos de fondo de la disposición, al haberse llevado a cabo las operaciones venta de acciones impugnadas, en un marco de anormalidad y en claro fraude al mercado de valores;

4°) Que independientemente de si la sanción aplicada al contribuyente Guzmán Lyon, como resultado de operaciones de bolsa que la SVS determinó que se realizaron fraudulentamente a través de una serie de operaciones mediante sociedades relacionadas, vinculadas o instrumentales (entre ellas la Sociedad de Inversiones Silvestre, reclamante de autos, y controlada o de propiedad del contribuyente Guzmán Lyon, como quedó asentado en las aludidas sentencias firmes), operaciones conocidas genéricamente como “Caso Cascada”, fueron o no



constitutivas de un hecho público y notorio (pese a ser de conocimiento generalizado por cualquier persona de nivel medio dada su amplia cobertura en la prensa) y que por tanto no requería de prueba, lo cierto es que la existencia de las sanciones aplicadas al reclamante y en que se estableció su carácter ilícito por infracción al artículo 53 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores por “efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento” y “efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios”, quedaron igualmente demostradas con la prueba instrumental que se acompañó en segunda instancia por el SII, consistente en lo fundamental en copias de las resoluciones administrativas sancionatorias y de las sentencias judiciales que acogieron la reclamación, pero solo parcialmente en cuanto a rebajar el monto de la multa impuesta; desestimándose todas las alegaciones tendientes a desvirtuar la existencia de los hechos infraccionales, que quedaron en consecuencia definitivamente establecidas. Sobre este particular, es útil dejar consignado que el fallo de esta Corte Suprema antes mencionado ratificó la existencia de un esquema irregular e ilegal en las operaciones financieras impugnadas por la SVS, señalando que “fueron ideadas de tal manera de desnaturalizar su fin último, esto es, impidiendo que el mercado opere como un lugar de libre y espontáneo encuentro de la oferta y demanda, por la vía de instrumentalizar normas bursátiles que propenden al precio justo de las operaciones y hacerlas funcionales a un esquema que buscó el beneficio personal de sus participantes, en perjuicio del interés de las sociedades cascada” (considerando trigésimo tercero);

5°) Que, en efecto, no era óbice para la valoración de dichas pruebas instrumentales (que además tenían el carácter de instrumentos públicos en juicio,



conforme al Art. 342 N° 3 del Código de Procedimiento Civil), que no se hubiesen tenido por acompañadas “con citación”, como quiera que esta regla procesal tiene por fin que se dé cumplimiento al principio formativo del procedimiento de bilateralidad de la audiencia, y de esta forma permitir a la parte contra quien se hace valer el instrumento objetarlo u observarlo dentro del plazo que prevé el Art. 69 del citado estatuto legal. Ahora bien, como toda regla procedimental, debe atenderse a su sentido teleológico y no puramente formal, esto es, si el objetivo de la actuación procesal se logra o no, aunque no se haya dado cumplimiento estricto a la formalidad. Si ese fin se ha logrado –como es principio, por lo demás, de la institución de la nulidad procesal- la trasgresión formal no produce perjuicio alguno y la actuación resulta, es en consecuencia, plenamente válida;

6°) Que en el caso que nos ocupa, y no obstante al no haberse dado cumplimiento a la formalidad ya anotada (tener por acompañado el documento “con citación”), el fin de la actuación procesal se cumplió, en cuanto permitió a la parte contra quien se hicieron valer los documentos poder observarlos, como aparece en autos (en que consta que se presentaron el 30 de enero de 2018, se tuvieron por acompañados el 2 de febrero del mismo año y con esa misma fecha la contraria formuló observaciones); no produciéndose, en consecuencia, indefensión al no quedar privada de ejercer –y de hecho lo hizo- sus derechos. Tampoco constituía impedimento para la valoración de los instrumentos de marras la circunstancia de haberse acompañado en segunda instancia, puesto que conforme a la remisión del Art. 148 del Código Tributario al Libro I del Código de Procedimiento Civil (en que se reglamenta el recurso de apelación) la prueba instrumental puede producirse en segunda instancia, con arreglo a lo que dispone el inciso primero del Art. 207 de este último cuerpo legal.



De modo que tales instrumentos debieron ser valorados por los sentenciadores de la instancia y atribuirles el mérito probatorio que correspondía, atendida su naturaleza;

7°) Que del modo como se viene razonando, resulta incuestionable concluir que el tribunal ad-quem, al no valorar dicha prueba producida válidamente en el proceso, infringió el Art. 132 del Código Tributario, en cuanto incumplió su deber de analizar y ponderar toda la prueba rendida en juicio; y de haberlo hecho, necesariamente debió concluir que era un hecho probado que el contribuyente Guzmán Lyon fue sancionado –como ha quedado dicho- por actuaciones ilícitas a través de una sociedad de inversión (Sociedad Silvestre), de la cual era propietario o controlador, como quedó asentado tanto en las resoluciones administrativas como en las sentencias judiciales firmes a que se ha hecho referencia; no pudiendo escindirse, para estos efectos, la persona del controlador o propietario de la sociedad que la utilizó para cometer ilícitos en el mercado bursátil, de la sociedad misma que pretende acogerse –invocando como causa dichas actuaciones bursátiles- a franquicias tributarias que fueron desestimadas por el SII, por la razón anotada;

8°) Que sigue de lo anteriormente dicho que la liquidación de impuesto a la renta efectuada por el SII y que es materia de este reclamo, y en que rechazó a considerar como ingresos no constitutivos de renta la utilidad por las operaciones bursátiles realizadas por la ya aludida Sociedad, no adolece de ilegalidad al estimar que siendo dichas utilidades resultado de las tantas veces operaciones de bolsa declaradas ilícitas, no cumplen con los requisitos para acogerse al Art. 107 de la LIR para que se consideren como ingresos no constitutivos de renta;

9°) Que es menester considerar que es un principio general del derecho que nadie puede valerse de una situación ilícita –menos cuando ha sido



establecida por sentencia judicial firme- para impetrar un beneficio en su favor, aun cuando formalmente cumpla con los requisitos que establece el precepto que invoca. Conforme a ello, si las normas de interpretación de la ley consagradas en los Arts. 19 a 24 del Código Civil tienen por fin establecer su sentido y alcance, dicho sentido jamás puede ir en contra del fin último de la regla. Ello excluye, por tanto, y en general, toda interpretación que atendiendo a la mera literalidad, permita la instrumentalización de la norma para lograr un fin espurio, contrario a su objetivo, y que contravenga el espíritu general de la legislación (como se establece en el Art. 24 del Código Civil), tales como la prohibición del enriquecimiento sin causa y el principio de buena fe. Es por ello que se ha dicho que debe excluirse la aplicación de una norma “que aparece literalmente como el precepto aplicable, pero que por circunstancias del caso específico, llevaría a una solución absurda o injusta...Puede así suceder que el caso actual, aunque formalmente aparezca comprendido en la norma, no esté jurídicamente cubierto por ella... Ante tal situación el intérprete, el juez, tiene la obligación de desechar la norma formalmente aplicable. El resultado absurdo o injusto a que conduciría un criterio contrario, hace obligatorio que rechace la aplicación de la norma -formalmente válida- porque su sentido no es claro ante el caso específico.” (Ducci Claro, Carlos, Derecho Civil - Parte General, pag.113. Editorial Jurídica de Chile, 2015);

10°) Que de este modo, y al quedar establecido como hecho que el contribuyente cometió un ilícito sancionado en la Ley de Mercado de Valores, se infringe el Art. 107 de la Ley de Impuesto a la Renta al permitirle considerar como ingreso no renta las utilidades obtenidas por el mayor valor en la venta de acciones a que se refiere dicha disposición, por cuanto se atenta contra el sentido mismo del beneficio que ahí se consagra;



11°) Que por todo lo precedentemente dicho, este disidente es de parecer que en el caso de autos concurren las infracciones de derecho denunciadas por el recurrente, al dejarse de aplicar la regla que obliga a la valoración de toda la prueba producida válida y oportunamente en juicio conforme a los principios de la sana crítica; y de este forma, omitir la existencia de un hecho que conllevó a interpretar erradamente –con infracción a su vez de los Arts.19 y siguientes del Código Civil- un precepto legal que era inaplicable al caso de autos; por lo que, haciendo lugar al arbitrio impetrado, la sentencia debe ser anulada y dictase la de reemplazo que rechace la reclamación tributaria materia de autos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Etcheberry; el voto disidente fue redactado por el Ministro Sr. Llanos.

Nº 33.345-2019.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., y la Abogada Integrante Sra. Leonor Etcheberry C. No firma la Ministra Sra. Letelier y la Abogada Integrante Sra. Etcheberry, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.





Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a siete de febrero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

